

Santiago, doce de agosto de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Por sentencia de ocho de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-406-2022, caratulados *“Ferreira / I. Municipalidad de Santiago”*, se acogió la acción, solo en cuanto declaró que entre las partes existió una relación laboral entre marzo y diciembre del año 2021, y se condenó a la demandada al pago del feriado proporcional y el pago de cotizaciones durante la relación laboral, rechazando además la demanda reconvenzional.

Contra este fallo recurrió de nulidad la parte demandante, fundado en dos causales que deduce de modo subsidiario.

Primero, deduce la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, es decir, por infracción a las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba. En subsidio, deduce la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, denunciando infringido el artículo 58 del mencionado Código del Trabajo, en relación con los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N° 3500, y artículos 86 y siguientes de la Ley N° 20.255.

Solicita que se acoja el recurso, se anule la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo que declare la existencia de relación laboral entre las partes, la continuidad de ésta, la nulidad del despido, que el despido fue injustificado, y que, por ende, se le adeudan las prestaciones indicadas en la demanda, o en subsidio, acoja la demanda en cuanto condenar al pago de las cotizaciones de seguridad social.

Declarado admisible el recurso, se procedió a su conocimiento en la audiencia del día veintiocho de junio último, oportunidad en que alegaron los abogados de ambas partes.

Considerando:

Primero: Que, la parte demandante fundamenta su recurso, en primer lugar, en la causal del artículo 478 letra b) del citado Código del Trabajo, es decir, por infracción a las reglas de la sana crítica al apreciar la prueba.

Señala que la conclusión a la que arriba la sentencia en los



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XRVVXPSTSJX

considerandos Quinto al Octavo, y luego el Undécimo, en orden a que la relación de la demandante fue una a honorarios, se logra con infracción al mandato del artículo 456 del citado Código del ramo, en específico, en el motivo Quinto, vulnerando la regla de la identidad, pues no se consideró la abundante prueba que determinaba que la relación existente era una de carácter laboral.

Agrega que se acreditó que las funciones en el tiempo trabajado eran las mismas, las que fueron en aumento, y por ello la valoración de la prueba atentó contra la naturaleza jurídica del contrato, solo por ser labores no “*idénticas*”.

Indica que, de los contratos y anexos acompañados, se colige que las funciones para las que fue contratada se correspondieron entre sí, lo que infringe la referida regla lógica de la identidad, pues las labores realizadas en los años 2019 a 2021 fueron las mismas.

Explica que además se vulneraron las máximas de la experiencia, al analizar las particularidades de la relación que unió a las partes, pues se acreditó la continuidad de las boletas que se extendieron para estos efectos, pues todas ellas se acompañaron, incluso la de febrero de 2021 que fueron emitidas correctamente, siendo inverosímil pensar que ese mes los servicios se prestaron de modo gratuito, y que ello significaría no haber acreditado dicho mes la prestación de los servicios.

Añade que la determinación de que el actor no prestó servicios en el mes de febrero de 2021 se aleja de la sana crítica al determinarla por la ausencia de una boleta respectiva, pues los servicios se prestaron de modo continuo e ininterrumpida.

Segundo: Que, para que prospere la causal alegada por el recurrente, es menester que la infracción de las normas sobre valoración de la prueba, conforme a las reglas de la sana crítica, sea manifiesta, esto es evidente, notoria, capaz de ser advertida a simple vista.

Además, la causal exige que en el recurso se indique qué reglas de la sana crítica se encuentran infringidas y cómo se produce esa trasgresión.

Tercero: Como se puede colegir del arbitrio, respecto del primer supuesto, esa condición no concurre en la especie, pues el impugnante se



limita a discrepar del fallo y a formular su propia apreciación de la prueba rendida, criticando el raciocinio valorativo que hace la juez de base en el considerando Sexto, en el cual concluye que, *“se logra acreditar que desde marzo de 2021 hasta diciembre del mismo año, las funciones que en la práctica y realidad cumplió la actora escaparon los límites de su contrato de prestación de servicios y fueron ejecutadas bajo subordinación, elemento característico y determinante de una relación laboral, por lo que existiendo todos los elementos de un contrato de trabajo regulado por el Código del ramo y, al no estar sujeta la actora a un estatuto especial, por no ser funcionaria pública, corresponde aplicar la norma general para todo tipo de relación contractual que se desarrolle en los términos previstos por el artículo 7 del Código Laboral, presumiendo la existencia de la relación laboral que se reclama conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del mismo cuerpo legal, al menos desde el 1 de marzo de 2021 al 31 de diciembre del mismo año, pues no logró acreditar remuneraciones en el mes de febrero como ya se dijo, elemento también característico de la relación laboral.”*

Ahora bien y en relación a la sanción de nulidad del despido por no pago de cotizaciones previsionales, la juzgadora de base siguiendo una jurisprudencia de nuestro alto tribunal expresó que en la especie concurre *“...un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la referida institución, cual es que ellos fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido. Por otro lado, la aplicación -en estos casos, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido...”* por lo que, en definitiva, rechaza la denominada “Ley Bustos”, cuando la relación laboral se establece con un órgano de la



administración del Estado.

Como puede advertirse, la sentenciadora hace uso de su facultad privativa de valorar la prueba, atribución que la ley no le concede al litigante, razón por lo cual el primer supuesto antes referido no se cumple en la especie.

En cuanto al segundo requisito, el recurso tampoco lo satisface, pues solo alude en forma genérica a que la sentencia atenta contra la lógica – *en específico regla de la identidad*- y las máximas de la experiencia, sin detenerse a desarrollar el referido subprincipio lógico y a su turno explicitar, qué máximas de la experiencia han sido infringidas y menos aún aclara de qué modo y forma se produce la infracción alegada a los indicados tópicos.

Cuarto: Que, en subsidio, deduce la causal del artículo 477 del comentado Código del Trabajo, en su hipótesis de infracción de ley, denunciando infringido el artículo 58 del referido cuerpo de leyes, en relación con los artículos 17 y 19 del Decreto Ley N° 3500, y artículos 86 y siguientes de la Ley N° 20.255.

Indica la recurrente que pese a declarar la existencia de relación laboral durante parte del periodo trabajado, el tribunal decidió no condenar a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales y de salud por el todo el periodo trabajado, sin expresar fundamento para ello.

Aduce que el tribunal ha incurrido en una falsa aplicación de ley al dejar de aplicar la norma contenida en el artículo 58 del Código Laboral, excluyendo a la demandada de la obligación de enterar las cotizaciones previsionales y de salud devengadas a favor de la actora. Así, si la sentencia determina que la relación es de carácter laboral, esta determinación debe aplicarse en su totalidad y no solo para el pago de una u otra indemnización.

Agrega que las normas de los artículos 84 del DL N°3.500 relacionada al 62 de la Ley N° 10.383, crean la obligación del pago de cotizaciones para efectos de obtener las prestaciones de salud que entregan los servicios públicos de salud, teniendo la calidad de afiliados a los mismos los trabajadores dependientes del sector público y privado. Así, indica, es claro que pesaba -y aún pesa- sobre la demandada la obligación de enterar



las cotizaciones previsionales y de salud devengadas a favor de la demandante mientras prestó servicios a su favor bajo un vínculo de subordinación y dependencia.

Finaliza indicando que las cotizaciones tienen una naturaleza imponible, siendo gravámenes que debe soportar el empleador, y al estar fijado por ley debe respetarse por todos los empleadores, no siendo afectado en nada por ello, que la sentencia tenga una naturaleza declarativa, pues esta naturaleza permite exigir el cumplimiento forzoso del pago de las cotizaciones, y que en nada influye como pretende la sentenciadora de instancia, lo establecido en la Ley N° 20.255, norma que estableció una reforma previsional, que es inaplicable al ser declarada la relación como laboral.

Quinto: Que de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del inciso primero del artículo 477 del Código del Trabajo, será procedente el recurso de nulidad cuando la sentencia definitiva se hubiere dictado con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

En términos simples la causal de nulidad señalada resulta procedente en el evento que el fallo aplique incorrectamente el derecho llamado a regir la cuestión que motiva la controversia y ello puede tener lugar, en primer término, en los casos de contravención formal de la ley, o sea, aquéllos en que el fallo prescinde de la ley o falla en oposición a su texto expreso. En segundo, en los casos de errónea interpretación de la ley, esto es, cuando la sentencia da al precepto legal un alcance diverso a aquel que debía haberle dado si hubiera aplicado correctamente las normas de interpretación de la ley que se establecen en los artículos 19 a 24 del Código Civil, y por último en los casos en que hay falsa aplicación de la ley, defecto que puede producirse cuando la ley se aplica a un caso no regulado por la norma o cuando la sentencia prescinde de la aplicación de la ley para los casos en que ella se ha dictado.

Sexto: Que, en el motivo Octavo de la sentencia en revisión, la juzgadora del grado refiriéndose al tópico que se reprocha por el arbitrio señala que “... *en cuanto a las cotizaciones previsionales que cobra y que*



abarcen el periodo que va desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2021, conforme los certificados de cotizaciones previsionales de Fonasa y AFP Plan Vital se advierte que las cotizaciones se encuentran pagadas por la misma demandante y/o por el sistema de salud previsional con el cual contaba la demandante, pues esta se cotizaba en virtud de su obligación prevista en la Ley 21.133 y el art. 89 y siguiente del Decreto Ley 3500.” Dictaminando a reglón seguido que “...encontrándose la demandante igualmente obligada a cotizar por sus ingresos en su calidad de independiente, la omisión de dicho pago ya sea en cuanto al porcentaje correspondiente al total de sus ingresos efectivos o su omisión total resulta igualmente imputable al incumplimiento u omisión de la actora, emanando dicho pago de la misma fuente de ingresos.” Concluyendo la sentenciadora que “...encontrándose imposibilitada la demandada para proceder al pago de las cotizaciones ya esgrimidas previo a la declaración de existencia de relación laboral, y no pudiendo nadie aprovecharse de su propio dolo o negligencia, no se condenará a su pago...”

Séptimo: Así las cosas, la juzgadora de la instancia realizó una correcta aplicación del derecho a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia, esto es, fijó el verdadero significado, alcance y sentido de las normas que la parte recurrente acusa vulneradas, en función de los hechos tenidos por probados, por lo que el motivo de infracción de ley enarbolado no podrá prosperar, ya que – como se dijo- las cotizaciones se encuentran pagadas por la misma demandante y/o por el sistema de salud previsional con el cual contaba la actora, pues esta se cotizaba en virtud de su obligación prevista en la Ley N°21.133 en consonancia con los artículos 89 y siguientes del Decreto Ley número 3500.

Por las razones anteriores, más lo dispuesto en los artículos 479, 481 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza sin costas**, el recurso de nulidad deducido por la parte demandante en contra de la sentencia de ocho de julio de dos mil veintitrés, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-406-2022, caratulados “*Ferreira / I. Municipalidad de Santiago*”, sentencia que, en consecuencia, no es nula.



Regístrese y comuníquese.

Redactó el ministro Aguilar.

Laboral-Cobranza N° 2526-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XRVVXPSTSJX

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jaime Balmaceda E., Alejandro Aguilar B. y Ministra Suplente Paola Cecilia Díaz U. Santiago, doce de agosto de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a doce de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XRVVXPSTSJX